



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

PROCESO: ORDINARIO LABORAL - SEGURIDAD SOCIAL.

DEMANDANTE: RAUL TAPIA ROMANIELLO.

DEMANDADO: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN.

RADICADO: 08-001-05-013-2012-00348-01.

INFORME SECRETARIAL. Señor Juez, al Despacho el proceso ordinario de la referencia, informándole que la parte demandante el día 26 de agosto de 2.022 interpuso recurso de reposición y en subsidio el de queja contra el auto anterior del 22 de agosto de 2.022, notificado por estado del 24 del mismo mes y año, que rechazó por improcedente el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, interpuestos por el apoderado de la demandada FIDUPREVISORA S.A en calidad de vocera y administradora del FONECA y el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandante contra el auto del 25 de octubre de 2.021, en el cual se dispuso la notificación del liquidador de ELECTRICARIBE SA ESP, la remisión del expediente a dicho agente liquidador, se abstuvo de ordenar el cumplimiento de sentencia o mandamiento de pago, no se accedió a la solicitud de la parte demandante de la entrega del depósito judicial No. 416010004469939 por valor de \$61.759.310.00, ordenó devolver al consignante el mencionado deposito judicial, se ofició a la FIDUPREVISORA S.A. para que certificara que entidad constituyó dicho depósito judicial a órdenes de este Juzgado, y además resolvió rechazar el recurso de reposición interpuesto por la Nación Superintendencia de Servicios Públicos frente a su vinculación. Así mismo, le informo que atención al proveído del 25 de octubre de 2.021 en correo del 25 agosto de 2.022, FIDUPREVISORA certificó que el depósito judicial No. 416010004469939 por valor de \$61.759.310.00, fue constituido para cumplir la sentencia dentro del presente proceso, con recursos del Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de la Electrificadora del Caribe S.A., E.S.P - FONECA, el cual, es una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, que forma parte de la sección presupuestal de la Superintendencia Servicios Públicos Domiciliarios, constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable No. 6-1 92026 de 09 de marzo de 2020, en los términos del Decreto 042 de 2020. De otro lado, es de resaltar que frente a las solicitudes de la parte demandante de entrega del citado depósito judicial y cumplimiento sentencia en donde el 28 de septiembre y 6 de octubre de 2.021 se solicitó también la terminación del proceso, el actor RAUL TAPIA ROMANIELLO en correo electrónico del 9 de febrero de 2022 solicitó que tal depósito sea solo entregado a él o trasladado a FIDUPREVISORA para que proceda hacer los correspondientes ajustes a su pensión y lo consigne a su cuenta. También es de anotar que la Secretaría del Juzgado frente a la cual hubo un cambio de secretario a mitad de mes de febrero de este año, continúa en labores de organización y depuración de archivos con ocasión a la digitalización de los más de 500 procesos del Juzgado frente expediente anteriores a este, labores dentro de las cuales se encontró este proceso pendiente por tramitar, no obstante, la limitación de conectividad en la sede judicial que incluso se ve reflejada en la utilización del micrositio y el TYBA para la carga de archivos. A su despacho para resolver.

Barranquilla, 2 de marzo de 2023.

MARIA B. POTES SANTODOMINGO
Secretaria.

JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA. Barranquilla, dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2.023).

Visto el informe secretarial que antecede y revisado el expediente, sería el caso pronunciarse sobre el recurso de reposición y en subsidio el de queja interpuesto por la parte demandante contra el auto del 22 de agosto de 2.022, notificado por estado del 24 del mismo mes y año, que rechazó por improcedente el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, interpuestos por el apoderado de la demandada FIDUPREVISORA S.A en calidad de vocera y administradora del FONECA y el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandante contra el auto del 25 de octubre de 2.021, en el cual se dispuso la notificación del liquidador de ELECTRICARIBE SA ESP, la remisión del expediente a dicho agente liquidador, se abstuvo de ordenar el cumplimiento de sentencia o mandamiento de pago, no se accedió a la solicitud de la parte demandante de la entrega del depósito judicial No. 416010004469939 por valor de \$61.759.310.00, ordenó devolver al



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

consignante el mencionado depósito judicial, se ofició a la FIDUPREVISORA S.A. para que certificara que entidad constituyó dicho depósito judicial a órdenes de este Juzgado, y además resolvió rechazar el recurso de reposición interpuesto por la Nación Superintendencia de Servicios Públicos frente a su vinculación, más acontece que este Despacho Judicial atendiendo que no obstante que las sentencias en sede de tutela de la Corte Suprema de Justicia invocadas por la demandada solo tienen efectos inter partes, no es dable desatender que se extraen reiterados pronunciamientos de nuestro máximo órgano de cierre, esto la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, bajo una óptica constitucional como el que en efecto se dio en sede de tutela, Radicación 94743 STL 12124 del 8 de septiembre de 2021, en el cual se resolvió ordenar al homólogo Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla, “desplegar las acciones necesarias para que haga entrega al accionante del título judicial que consignó la ejecutada Electricaribe SA ESP correspondiente al retroactivo pensional liquidado dentro del proceso ordinario laboral 08001310500920090031801”, con fundamento a que:

“Para la Sala resulta inentendible que después del reconocimiento judicial del derecho pretendido, el convocante deba continuar esperando a que se agoten los procedimientos, exigencias y trámites internos, para ver materializadas las órdenes dictadas dentro del proceso ordinario por él instaurado hace más de 11 años, máxime, cuando Electricaribe S.A. E.S.P., sin objeción alguna, consignó a órdenes del juzgado la suma que liquidó a título de retroactivo pensional adeudado¹.

Bajo ese panorama, y como quiera que está acreditado que Carlos Humberto Guarín Gallego es un adulto mayor² que cuenta con 65 años de edad, y que después de tramitar el juicio ordinario que instauró en el año 2009, obtuvo el reconocimiento judicial del derecho pretendido, se tiene que es sujeto de especial protección y, por tanto, requiere de un tratamiento excepcional a fin de garantizar la materialización y efectividad de sus derechos.

De acuerdo con la protección especial e inmediata a los adultos mayores, la Corte Constitucional en sentencia T-252 de 2017, determino lo siguiente:

[...] Por este motivo, es fundamental que se otorgue un trato preferencial a las personas mayores, con el fin de evitar posibles vulneraciones a sus derechos fundamentales y para garantizar la igualdad efectiva. Por ello, resulta indispensable que el Estado asuma las medidas necesarias para proteger a este grupo frente a las omisiones o acciones que puedan generar violación de sus derechos, obrando incluso sobre consideraciones meramente formales. En el mismo sentido, es importante que se generen espacios de participación en los que las personas mayores puedan sentirse incluidas dentro de la sociedad y puedan valorarse sus contribuciones a la misma. Es así como la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que:

“Reconoce la misma jurisprudencia que “la tercera edad aparea ciertos riesgos de carácter especial que se ciernen sobre la salud de las personas y que deben ser considerados por el Estado Social de Derecho con el fin de brindar una protección integral del derecho a la salud, que en tal contexto constituye un derecho fundamental autónomo”. Y si bien, “no puede confundirse vejez con enfermedad o con pérdida de las capacidades para aportar a la sociedad elementos valiosos de convivencia, tampoco puede perderse de vista que muchas de las personas adultas mayores se enfrentan con el correr de los años a circunstancias de debilidad por causa del deterioro de su salud, motivo por el cual merecen estas personas una protección especial de parte del Estado, de la sociedad y de la familia, tal como lo establece el artículo 46 de la Constitución Nacional”.

Por tales razones, la Corte itera que los adultos mayores no pueden ser discriminados ni marginados en razón de su edad, pues además de transgredir sus derechos fundamentales, se priva a la sociedad de contar con su experiencia de manera enriquecedora.

De ahí, que en el caso bajo examen si bien, el promotor tuvo a su alcance el recurso de reposición para controvertir el auto proferido el 11 de agosto de los corrientes mediante el cual el Juzgado dispuso la devolución del depósito judicial al agente interventor de Electricaribe S.A. E.S.P. en Liquidación, lo que significaría que no cumplió con el presupuesto de subsidiariedad, lo cierto es que dicha exigencia condicional puede flexibilizarse y superarse cuando el juez de tutela advierte la concreción de una lesión irreparable para el titular de los derechos en peligro, tal y como aquí se advierte, habida cuenta de que lo pretendido recae en el pago de un derecho pensional.

¹ La Sala de Casación Laboral en sentencia CSJ STL7544-2018 confirmó la decisión de conceder el amparo ante la negativa del Juzgado accionado de entregar un depósito judicial con el cual se pretendía pagar «las condenas impuestas en una sentencia ejecutoriada de manera clara, expresa y actualmente exigible».

² CC T-015-2019. El concepto “adulto mayor” fue definido en la Ley 1276 de 2009. En ella se apela a la noción de “vejez” propia del sistema de seguridad social en pensiones, con el fin de identificar la población destinataria de la atención integral en los centros de vida. De cara a lo dispuesto por el Legislator en esa norma, será adulto mayor quien supere los 60 años o aquel que sin superar esa edad, pero con más de 55 años, tenga condiciones de “desgaste físico, vital y psicológico [que] así lo determinen.



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Lo consignado hasta aquí se acompasa con lo decidido por esta Sala en providencias CS STL1263-2021, CSJ STL9638-2021 y CSJ STL10611-2021, a través de las cuales se desataron asuntos similares al que hoy ocupan su atención.”

Y que la misma Corporación, también en sentencia de tutela STL 10611-2021 del 18 de agosto de 2021, Radicado 94251 con Ponencia de la Magistrada Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, para resolver un caso similar, también consideró que:

“Enterado de esta consignación, el beneficiario de ella solicitó al juzgado de conocimiento su entrega a través de escrito calendado de 8 de junio de 2021.

Frente a dicha solicitud, mediante auto de 29 de junio de 2021, la autoridad convocada ordenó remitir el expediente al PAR Foneca para que procediera de acuerdo con sus competencias realizara el pago de la obligación impuesta en la sentencia judicial. En consecuencia, no accedió a la entrega de los títulos en cita y dispuso la devolución del título al PAR Foneca.

Por lo visto, los argumentos esgrimidos por la autoridad judicial enjuiciada para negar la entrega de los depósitos judiciales no pueden ser avalados en sede constitucional, pues la devolución de los dineros a la depositante, lejos de garantizar el pago directo de la deuda en favor del beneficiario, quiebra las formas propias del juicio ejecutivo, e injustificadamente obliga al ejecutante a iniciar un trámite administrativo para reclamar los créditos que se le concedieron en un juicio ordinario ya terminado.

Bajo ese panorama, encuentra la Sala, contrario a lo sostenido por el juez constitucional de primera instancia, que con las actuaciones desplegadas por el juzgado accionado si se vulneran los derechos fundamentales al promotor, máxime cuando la consignación que se efectuara a su nombre, corresponde al pago de acreencias pensionales y deviene con ocasión del cumplimiento de una sentencia judicial en firme.

De manera que, si se analiza el contexto de la situación, no puede concebirse que la administración de justicia imponga una carga desproporcionada al accionante quien, para obtener el reconocimiento de sus derechos tuvo que adelantar un litigio ordinario laboral por casi seis años y, ahora, luego de haber obtenido sentencia ejecutoriada a su favor, no pueda acceder a la entrega de unos dineros que el mismo juzgador reconoció como suyos, por un simple trámite procesal que a todas luces no se exhibe como razonado.

Refuerza lo anterior, que ha sido la misma entidad, quien en forma voluntaria y autónoma decidió cumplir la orden judicial con el único fin de cancelar la acreencia al actor.

Conforme lo anterior, y como quiera que está acreditado que Armando Enrique Blanco Castillo es un adulto mayor que cuenta con 70 años de edad, y que después de tramitar el juicio ordinario que instauró en el año 2015, obtuvo el reconocimiento judicial del derecho pretendido, se tiene que es sujeto de especial protección y, por tanto, requiere de un tratamiento excepcional a fin de garantizar la materialización y efectividad de sus derechos.”

Reiterando lo atinente a la protección especial e inmediata a los sujetos de la tercera edad, que abordó la Corte Constitucional en sentencia T-252 de 2017.

Por lo que en este tipo de asuntos se atenderán los argumentos expuestos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia bajo la óptica constitucional referentes a que “la parte demandante es un sujeto de la tercera edad, que devolver los dineros ya consignados y remitirlos a la entidad consignante para que el demandante realice un trámite administrativo adicional para lograr el pago de lo ordenado mediante sentencia judicial, pone en cabeza de este una carga adicional para obtener el pago de un derecho reconocido mediante un proceso judicial”, y que en el caso concreto se ordenó el reconocimiento y pago de una reliquidación pensional, aunado a que según certificación allegada por la FIDUPREVISORA el 25 de agosto de 2022, los dineros con los cuales se constituyó el depósito judicial No. 416010004469939 por valor de \$61.759.310, provinieron del Fondo de Pasivo pensional y Prestacional de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. FONECA, la cual es una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, que forma parte de la sección presupuestal de la Superintendencia Servicios Públicos Domiciliarios, constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable No. 6-1 92026 de 9 de marzo de 2020.



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Luego, en aras de evitar un desgaste en la Administración de Justicia y como quiera que del artículo 48 del CPTSS se infiere que el Juez Laboral al asumir la dirección del proceso también adoptará la óptica constitucional, se impone dejar sin efecto los numerales 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del auto del 25 de octubre de 2.021, y a su vez, el del 22 de agosto de 2.022 que rechazó los recursos contra el proveído anterior, para en su lugar, declarar en primer lugar, la terminación del proceso por pago de la obligación, atendiendo además de la aludida certificación de FIDUPREVISORA, que el apoderado de la parte demandante, mediante escritos de 28 de septiembre de 2021 y 6 de octubre de 2021 solicitó la entrega del pluricitado título judicial manifestando que comprendía las condenas y las costas e igualmente deprecó la terminación del proceso, constatándose en efecto como se indicó en el informe secretarial la existencia del depósito judicial No. 416010004469939 por valor de \$61.759.310, a favor del señor RAUL TAPIA ROMANIELLO, solicitud que será atendida de conformidad con los argumentos expuestos en precedencia dado que se pone de presente que las condenas entre el 1º de agosto de 2011 y el 29 de febrero de 2020 ascienden a la suma de \$52.369.100 más las costas de primera y segunda instancia en la suma de \$11.312.464, menos el valor correspondiente a los aportes a salud equivalente a \$1.922.254 para un total de \$61.579.310, valor que coincide con el del depósito judicial en mención, de modo que ordenándose la entrega de este depósito judicial se acredita en efecto el cumplimiento total de la obligación, por pago total de la misma, y por ello así se declarará como se advirtió junto con la correspondiente entrega de los dineros que reposan a favor del actor, resultando inane dar trámite al recurso de reposición y en subsidio el de queja interpuesto contra el auto del 22 de agosto de 2.022.

Cabe anotar que en el eventual caso de que se presenten disensos o reclamos posteriores por sumas insolutas y/o reliquidaciones, estas serán de competencia del Liquidador de ELECTRICARIBE o del FONECA-FIDUPREVISORA dependiendo de los conceptos y fechas reclamadas, teniendo en cuenta la asunción de responsabilidades de una u otra entidad.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO: DEJAR sin efecto los numerales 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del auto del 25 de octubre de 2.021, y a su vez, el auto del 22 de agosto de 2.022, por los motivos antes expuestos.

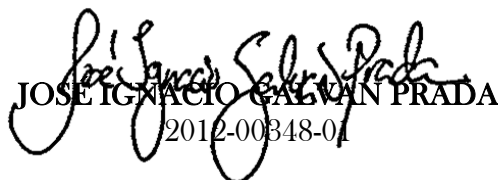
SEGUNDO: DAR por terminado el presente proceso por pago total de la obligación.

TERCERO: ORDENAR la entrega del depósito judicial No. 416010004469939 por valor de \$61.759.310 al demandante, señor RAUL TAPIA ROMANIELLO identificado con CC No. 3.710.302, conforme lo solicitado por el mismo demandante, que corresponde al pago de la obligación.

CUARTO: Cumplido lo anterior, **archívese** el expediente, una vez se encuentre ejecutoriado el presente auto, previa anotación en el libro radicator y demás registros correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EL JUEZ,


JOSE IGNACIO GALVAN PRADA
2012-00348-01

Juzgado 13 Laboral Del Circuito de Barranquilla
Día 06 Mes 03 Año 2023
Notificado por el Estado N° 032
La Providencia de fecha Día 02 Mes 03 Año 2023
La Secretaria María Bernarda Potes Santodomingo